

Crisis de régimen, cambio de régimen. Díptico: Ayotzinapa

Julio Moguel*

En los últimos tres lustros, el análisis político dominante en México ha sido hegemónico por una conceptualización ligada a ideas como *alternancia*, *ciudadanización* (entendida en la perspectiva de una especie de progresividad y avance –ineluctable– del régimen democrático), *competencia partidaria*, *buen gobierno*, *gobernanza*, etcétera. Hoy, la crisis profunda y sin retorno de la “democracia política a la mexicana” obliga a hacer a un lado tales fórmulas de aproximación, tan engañosas como imprecisas en sus capacidades para dar cuenta de lo que está pasando y de lo que ya desde ahora se prefigura en el futuro mediato de México. La época –nueva, sin duda, y sin retorno– que abre los crímenes de Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, y la crisis de régimen que le sigue, invita a su enterramiento definitivo. Intentemos entonces retomar algunos conceptos e ideas que permitan dar cuenta de lo que hoy se presenta en el país, en mi opinión, como una crisis de régimen más decantada y maciza que la experimentada en 1968, después del crimen de Tlatelolco.

La particularidad del momento político que se vive en México tiene un elemento distintivo que vale la pena resaltar: es la primera vez, desde la institucionalización del régimen político mexicano (periodo que se abre en 1934 con la configuración del régimen presidencialista sexenal), en que la exigencia de que un Presidente del país haga sus maletas y se vaya adquiere fuerza de voces y sentido de posibilidad. Con el agregado conocido de que el grito “¡Fuera Peña!”¹ cuenta

ahora con un significativo soporte de credibilidad al hacer tierra con la mayor parte de los registros de encuestas

octubre de 2014, pero fueron haciéndose más comunes y generalizadas durante el mes de noviembre. Finalmente, se asentó y expandió como reguero de pólvora durante los primeros días de diciembre, primero cuando el Presidente cometió el desatino de llamar a los mexicanos a “superar este momento de dolor” (4 de diciembre de 2014), y cuando los análisis de ADN realizados en el extranjero confirmaron la muerte de uno de los 43 normalistas secuestrados, Alexander Mora Venancio (6 de diciembre de 2014). No fue menor, en cuanto a la focalización de la exigencia de renuncia de Enrique Peña Nieto, el hecho de que el 1 de diciembre cumpliera justo dos años de gobierno, y que todo mundo tuviera entonces puesta la lupa en los réditos o descréditos de su gestión.

y de valoraciones de escala doméstica e internacional².

Ciertamente nos encontramos en la historia moderna del país con un caso como el de un degradado Díaz Ordaz, cuya renuncia fue pretendida o deseada por miles o millones de personas en un momento dado, pero tal desiderátum se fue desdibujando

² La caída en los niveles de popularidad de Enrique Peña Nieto en los medios internacionales parece no tener precedentes en los escenarios planetarios de la actualidad, en dimensiones mayores a otros casos en cuanto al nivel del despeñamiento por el hecho simple y llano de que su encumbramiento había alcanzado velocidades y alturas prácticamente inéditas en el registro medio internacional.

* Especialista en cuestiones agrarias.

¹ El grito “¡Fuera Peña!” se empezó a escuchar con relativa regularidad en las movilizaciones callejeras desde la primera quincena de

en el curso de los días de un periodo al que, después de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ya no le quedaba mucha cuerda sexenal. Dicho de otra forma: la “caída” –acaso más vertiginosa que la que en su momento sufrió Gustavo Díaz Ordaz– de la figura y del prestigio de Peña Nieto se da no en el ocaso sino en el temprano primer tercio de su sexenio; esta diferencia, en el esquema comparativo que nos ocupa en este texto, también es importante y vale la pena considerarla.

No queremos decir que en nuestros cálculos o previsiones la renuncia de Enrique Peña sea algo inminente o que su “caída” lo lleve sin mayores preámbulos a subirse a un Ypiranga y emigrar. Sólo decimos –y es justo eso lo que nos parece esencial para el análisis de coyuntura y de periodo– que es la primera vez, durante casi un siglo, que la exigencia de renuncia de un Presidente mexicano adquiere un curso amplio y franco a principios del sexenio de mandato y no al final (primer tercio de un gobierno programado para concluir en 2018), y que los factores que se conjugan para que dicha exigencia adquiera visos de posibilidad tienen ahora más consistencia que nunca.

La “caída” de Peña Nieto como exigencia o demanda social no puede reducirse, en la valoración que implique su posibilidad, al número de gargantas que lancen dicho grito en las manifestaciones populares de México y de ultramar. Ello ya es significativo, pero no basta: se requiere que tal exigencia se inscriba en una crisis económica, social y política de modalidades y magnitudes particulares, circunstancia crítica que derive o tienda a derivar en una fractura o debilitamiento extremos del bloque político (núcleo líder más aliados de comando dentro del bloque político dominante en el país) que tiene en sus manos las riendas efectivas del poder estatal.

Dicho proceso de quiebre o de fractura del bloque político dominante no se da, o no se dará, sólo por el hecho de que entre las fuerzas políticas de dominio existan diferencias serias o profundas en lo que se refiere al curso económico y político a seguir. Se da o se dará en definitiva en el espacio-tiempo de un proceso de des-legitimación del núcleo líder de gobierno, dentro de un cuadro instalado y creciente de ingobernabilidad. Pero no sólo del núcleo líder de gobierno: la encuesta más reciente de GEA-ISA (aparecida en prensa el 10 de diciembre de 2014) muestra con toda claridad la caída de la popularidad de Enrique Peña Nieto, pero la desconfianza y rechazo se extienden a los órganos policíacos (la confianza se redujo de 20 a 10% entre septiembre y diciembre), a los partidos políticos (con una caída del 16 al 7% en el mismo ciclo) o al ejército (con un derrumbe del 48 al 30% para el mismo periodo).

Más completa, y aparecida apenas unos días después de la realizada por GEA-ISA, una encuesta del periódico *Reforma* dio la siguiente relación: la confianza en el ejército y en el Gobierno de la República habría caído 13 puntos porcentuales entre abril del año pasado y finales de noviembre de este año, con una confianza sostenida en tales instituciones en los raquícos puntos del 56 y el 33%, respectivamente. La policía, por su parte, disminuyó para el mismo periodo 10 puntos porcentuales, y los partidos políticos con una disminución del 25 al 22% para el mismo ciclo. Cabe referir aquí que el máximo nivel de desconfianza se concentra justo en la policía y en los partidos políticos, con 76 y 77%, respectivamente³.

Encuesta en torno a la confianza ciudadana en...						
¿Cuánta confianza tiene en...?	Mucha/Algo			Poca/Nada		
	Abr. 13	Dic. 14	Var.	Abr. 13	Dic. 14	Var.
La Iglesia	59%	58%	-1	38%	40%	+2
El ejército	69%	56%	-13	27%	42%	+15
El gobierno de Enrique Peña	46%	33%	-13	51%	66%	+15
Los partidos políticos	25%	22%	-3	71%	76%	+5
La policía	32%	22%	-10	66%	77%	+11

Fuente: Periódico *Reforma*, 13 de diciembre de 2014. Encuesta nacional en vivienda realizada del 20 al 23 de noviembre de 2014 a 1020 mexicanos adultos, con margen de error de +/-3,1% con un nivel de confianza de 95%.

Es este espacio-tiempo específico el que se ha instalado en el país desde el 26 y 27 de septiembre del año en curso, con los fatídicos hechos delictivos del municipio de Iguala. Digámoslo sin demora: los asesinatos y la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa ha desnudado, de manera rápida y sin remedio, al régimen encabezado por Enrique Peña Nieto, en un proceso de des-ocultamiento paulatino de todas las miserias y de todo el salvajismo con el que es capaz de operar uno de los gobiernos más reaccionarios y antipopulares de los que pueda tenerse memoria en el país. Y ha desnudado a la vez todo el andamiaje político montado en torno a las instituciones que conforman el régimen político vigente, con el agravante de que, conforme pasan los días y los meses desde aquellos días fatídicos de Iguala, se hace cada vez más evidente para todos que los hechos del referido municipio guerrerense tienen, “haiga sido como haiga sido”, una impronta política estatal. Es un crimen de Estado –de lesa humanidad, como se ha dicho– cuyo origen y fuente de definición y operación

³ Periódico *Reforma*, 13 de diciembre de 2014.

resulta simple y llanamente inconfesable desde la ventanilla oficial⁴.

Es un crimen que ha llegado a horrorizar a todo el mundo, tanto por el sentido obviamente implícito en los hechos (estudiantes pobres, luchadores sociales de prosapia reconocida, etcétera) como por la forma, que hace que lleguen, inevitablemente, a la memoria de cualquiera las imágenes de los pogromos rusos o alemanes de épocas pasadas, o las deportaciones y asesinatos masivos de la época de Stalin, o las atrocidades criminales del apartheid sudafricano, o algunos escenarios de la guerra vietnamita, o los crímenes pinochetistas o los de las dictaduras militares que sentaron sus reales en países sudamericanos como Brasil, Argentina, etcétera.

Es un crimen que acaso ni siquiera pueda compararse con el de 1968, en Tlatelolco, pues entonces la masacre apareció “justificada” desde la mirada fascista del diazordacismo con el argumento de que frente a un movimiento social y político “antipatriótico y desbocado se había hecho uso legítimo de la fuerza”. En el caso de Iguala, las cosas suceden-sucedieron de otra forma, con fuerzas del “orden” que, desde un cálculo frío y programado (todo el asunto del 26 y 27 de septiembre se inscribe claramente en un operativo complejo, con muchos actores implicados *in situ*), secuestraron y asesinaron (hipótesis que cada vez es menos hipótesis: la del asesinato de los 43 normalista de Ayotzinapa) a jóvenes inermes que no tenían más interés que luchar pacíficamente por la justicia y sus derechos.

La crisis de régimen que nos ocupa se ha manifestado de muy diversas formas y en muy diversos medios, pero pocos tan significativos como el expresado en la visita que los padres de los 43 normalistas desaparecidos hicieron

⁴ Lo dice un reconocido columnista de un diario nacional: la dificultad relacionada con el posicionamiento gubernamental frente a los hechos de Iguala resulta “extraña, asida a un libreto mal hecho e indefendible, como si se estuviera ante una ‘razón de Estado’ que obliga a la administración de Peña a cerrar las puertas a la verdad y la justicia porque en los hechos estuvieran de alguna manera involucrados altos personajes civiles, policíacos o militares, o determinadas instituciones clave”. Acaso la verdad de todo este asunto se encuentre en la nota que acaba de aparecer en Twitter, relativa a la información aportada por un científico norteamericano de nombre Andreas Eligium, quien señala que “durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el satélite Terra de la NASA sólo registró algo quemándose en Chilapa, Guerrero, y no en Cocula, Guerrero, como lo dijo el Procurador de la República, Murillo Karam”. La nota twittera agrega que ello pudiera significar que “los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron asesinados y calcinados en el campo militar” del referido lugar.

al Senado de la República el pasado 9 de diciembre. En dicho escenario sucedió algo insólito y trascendental: los padres de los 43 colocaron a los senadores literalmente contra las cuerdas, calificándolos de “corruptos, mentirosos, hipócritas” y acusándolos de ser, “como parte del Estado mexicano”, culpables de un “crimen de lesa humanidad”. El pliego petitorio que dejaron en manos de los senadores habla por sí mismo del sentido en que se perfilará en adelante su ya ahora decisiva intervención en el espacio de la coyuntura política nacional: a) Presentación con vida de los normalistas desaparecidos; b) Desaparición de poderes en el estado de Guerrero; c) Cancelación de las elecciones del próximo año en la entidad; d) Apertura, por parte de la Procuraduría General de la República, de nuevas líneas de investigación, que incluyan al ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre; e) Ratificación inmediata de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para que pueda intervenir en el caso de Iguala.

¿Son descabelladas tales exigencias? ¿Quedarán en el vacío después de que lleguemos a las fechas navideñas y las cosas cambien de color? (desiderátum claramente pensado o sentido por algunos de los diseñadores de la política de gobierno). Si lo que hemos planteado en líneas anteriores tiene algún sentido de realidad, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que tales exigencias de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se han cocinado en los niveles propios del calor que desde finales de septiembre prevalece en el horno político nacional.

Porque, ¿cómo realizar elecciones en una entidad que se encuentra profundamente convulsionada y que no sabe cuándo recuperará su equilibrio y alcanzará los mínimos niveles de normalidad? La encuesta GEA-ISA a la que nos referíamos en líneas anteriores coloca el abstencionismo nacional previsible para el 2015 en un 70%. Imagine usted cuál será el abstencionismo en el estado de Guerrero. ¿Le gusta la cifra de un 80%? Podría incluso apostarse que puede ser un poco más alta. ¿Y cómo lidiar, desde los malabares que le tocan al gobierno federal y los otros poderes del Estado, con el tema relativo a la exigencia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, si el gobierno interino encabezado por el académico Rogelio Ortega parece estar sostenido en el limbo?

Los otros tres puntos del esquema de demandas que los padres de los 32 estudiantes de Ayotzinapa dejaron a los senadores el pasado 9 de diciembre agregan sólo lo necesario e ineludible: presentar con vida a los 43 normalistas desaparecidos (demanda irreductible, por imposible que

hoy parezca); investigar al ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre; incorporar a la Organización de las Naciones Unidas en los procesos de investigación o en el seguimiento de los mismos.

La “caída” de Peña Nieto, entonces, no es imposible dentro del marco de la profunda crisis de régimen que nos ocupa. Más si, como ya es tema diario en todos los medios, las reformas estructurales —particularmente la referida a la reforma energética— entran ahora en un terreno tan pantanoso como el que ha creado la guerra de los titanes internacionales del petróleo.

¿Quiere usted sumar algo, amigo lector, al esquema de análisis de coyuntura? ¿Acaso el espinoso tema de la Casa Blanca o el de la cancelación a los chinos, por mano presidencial, del proyecto de inversión para la construcción del tren bala Querétaro-ciudad de México? ¿Acaso los graves intentos de Peña Nieto (marcados en su decálogo de “salida a la crisis” que dio a conocer en días pasados) por dinamitar los “terceros niveles de gobierno”, es decir, los poderes municipales o los ayuntamientos establecidos constitucionalmente, con la creación del “mando único” policial?

Por razones de espacio, no profundizaremos en la valoración de la cuota que corresponde al escabroso y patético asunto de la Casa Blanca en lo referente a la crisis de credibilidad sufrida por la figura presidencial, ni revisaremos los intrínquilos relacionados con la cancelación del proyecto del tren bala Querétaro-ciudad de México, ni analizaremos lo relativo a la profundidad de la crisis económica que ya se perfila con la devaluación del peso frente al dólar y la caída del precio del petróleo. Buscaremos más bien otras claves —estructurales— en el armario.

Fue el 27 de noviembre cuando Enrique Peña Nieto pretendió presentar, a la opinión pública de México y del mundo, sus “medidas” para dar un vuelco a la grave circunstancia que se vive y recuperar el vuelo pretendidamente promisorio que se había perfilado unos meses antes con la aprobación de las “grandes reformas estructurales”. Todo ello dentro del formato de un decálogo de buenas intenciones que tuvo como eje el señalamiento de que el mayor de nuestros males nacionales se encuentra dentro del tejido formado por el tercer nivel de gobierno: los ayuntamientos o el “poder municipal”. “Iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”; “Eliminación de policías municipales para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas” (puntos 1 y 3 del decálogo presidencial).

El mensaje o la línea central del decálogo peñanietista tienen la doble marca de lo que ya es costumbre en el lenguaje de la actual administración federal. El primero, referido al simple y llano ocultamiento —o pretensión de ocultamiento— de una verdad incontrastable y visible para cualquiera que esté dispuesto a ver: que el cáncer pernicioso inserto en el cuerpo nacional atraviesa todos los niveles, y que en consecuencia no es sólo ni fundamentalmente en los espacios municipales donde debe aplicarse el bisturí. La segunda marca del decálogo peñanietista se refiere a lo que resulta inconfesable desde el lenguaje presidencial y de cualquier otro miembro de la administración pública federal: la intención programada del actual núcleo gobernante para desarticular el sistema democrático de los “tres niveles de gobierno”, en el que los ayuntamientos conforman la base de toda la pirámide estatal.

Regresemos a los puntos 1 y 3 enunciados: “Iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”; “Eliminación de policías municipales para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas”. Líneas dirigidas a anular lo que claramente se establece en el Artículo 115 constitucional, fórmula que, como veremos, es complementaria a la estrategia que el régimen peñanietista ha escogido para enfrentar al narcotráfico, en construcción de “modelos para armar” del tipo de los que puso recientemente en marcha en Michoacán, donde un gobernador manipulable llegado del medio universitario da la cara como titular del Ejecutivo estatal mientras un “comisionado” se encarga de hacer y deshacer como verdadero mando “único” en la entidad.

La declaración de Peña Nieto el pasado 27 de noviembre tiene otros ángulos importantes que convendría referir, pero por la economía de espacio a la que estamos obligados sólo nos referiremos a uno: el señalamiento expreso de la existencia de “dos Méxicos”, uno boyante y en todo caso proclive a los llamados del desarrollo, y otro sumergido y atascado en sus pobrezas ancestrales. Pobrezas que —se desprende— son generadoras de taras y vicios diversos, además de males como los que emergieron en la tarde-noche de cuchillos largos en Iguala el 17 y 27 de septiembre. Romper el eje de las municipalidades como el “tercer nivel” de gobierno de nuestro edificio estatal queda entonces ligado a una extraordinaria cruzada de grandes proyectos e inversiones que, ubicados en las áreas geográficas del Centro y Sur-sureste del país, reconducirán a México hacia un futuro promisorio.

Con estas iniciativas de Peña Nieto sobre la imposición de un “mando único” en cada una de las 32 entidades

federativas entra entonces a jugar –a querer jugar, pues nos encontramos aún en las intencionalidades y primeros grandes movimientos del juego en cuestión– otra de las piezas con las que se quiere completar el ciclo de transformaciones estructurales del Estado nacional. En un esquema que hoy ya es posible adivinar.

El Estado al que aspira el neoliberalismo de la era peñanietista no tiene, o no debe tener, contrapesos políticos importantes en el plano estructural. “Presidencialismo imperial”, dirían algunos, pero en todo caso es un verticalismo fuerte en el mando, convirtiendo al “segundo nivel” o a los “segundos niveles” de gobierno –los gobiernos estatales– en campos prácticamente “propios”, dominables o manipulables del Poder Ejecutivo federal (mando civil, por supuesto, pero también –y acaso sobre todo– mando policíaco-militar).

Los terceros niveles de gobierno –los más ligados o cercanos a la gente, como se dice–, correspondientes al nivel municipal, quedan fuera de todo sentido o funcionalidad: pensados en el ideal decimonónico (reformista o revolucionario) como indispensables en el sistema democrático justo porque fundan su estructura en una base de representación y de poder territorial, ahora chocan con las dinámicas y tendencias de la organización económica (y sus concomitantes fórmulas de organización política) que, en el tiempo-espacio del neoliberalismo, tiende a basarse en salvajes procesos de “clusterización”⁵. De un capitalismo “sin rostro” y “sin sujetos” basado en el dominio creciente del capital financiero (nacional-internacional, justo en formatos integradores a la manera de clusters) y de aliados menores que obtienen ganancias sin límite en áreas diversas del cuerpo económico propio del referido proceso de integración. Y se compone crecientemente, en casos como el de México, por áreas productivas y/o de servicios altamente rentables ligados a encadenamientos “hacia abajo” que llegan o pueden llegar a procesos económicos y sociales de “lumpenización”. Es decir: de espacios sociales, políticos y económicos en los que no existen mecanismos automáticos de ajuste o de autorregulación (por el mercado

⁵ Cluster o clúster es un término que empezó a utilizarse hacia finales del siglo pasado para identificar redes-sistemas de integración empresarial dentro de un campo territorialmente ubicado de “aglomeración”. Michael Porter, primero en utilizar el concepto dentro del campo de la economía, definió la idea de clúster “como concentraciones de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular para la competencia”. Hoy, dicho concepto se utiliza prácticamente para cualquier proceso de integración empresarial, tenga ésta o no una base industrial.

o por la intervención estatal), en los que pueden moverse, como peces en agua, transacciones o negocios ilícitos o propios del crimen organizado, dentro de un campo fértil, casi obligado, de corrupción.

La base sobre la que una economía o “sociedad” regional puede ser clusterizada presupone que los activos patrimoniales del lugar sufran un proceso extremo de mercantilización, con encarrilamientos salvajes de des-territorialización que incluye, por supuesto, a los bienes o productos del subsuelo y al “uso y disfrute” de los “recursos naturales” del lugar. Y presupone a la vez la reconversión radical de los encadenamientos sociales-productivos regionales de “origen natural” –llamémoslo así–, pues estos encadenamientos sí tienen rostro e insisten tozudamente en sobrevivir. En otras palabras, y volviendo a nuestro tema o referencia “municipal”, la clusterización del medio supone eliminar o subsumir los esquemas o modelos representativos de participación y decisión, en una escala que permita operar a México como un gran sistema económico del tipo “Sociedad Anónima de Capital Variable”.

El centro operador fundamental de la estrategia de “mando único” policíaco no puede ser más que el ejército⁶. Es la única institución que tiene la estructura y las condiciones presupuestales necesarias y suficientes para operar en un campo global y de manera “unitaria” en el complejo y diverso escenario socio-político del país. El tema, considerado tabú para muchos analistas y olvidado en definitiva por otros en su afán por pretender que vivimos en un marco formalmente civilista, representativo y democrático, es hoy tema central para la identificación de claves fundamentales de nuestra “coyuntura”. Pero no es

⁶ Llama la atención que un articulista de un conocido periódico nacional clame porque el referido “mando único” sea puesto en manos del ejército. Nos dice el articulista: “[...] llama la atención que [en el discurso del presidente Peña del 27 de noviembre] no se mencionara el apoyo que las fuerzas armadas darán al rediseño de la estrategia toral que el Presidente y su gabinete desarrollarán [...] hasta que termine el sexenio [...]; faltó mencionar de qué fortalezas y de quiénes se van a valer para lograr un mediano éxito [...] lo propuesto [...]. ¿Serán [...] las fuerzas armadas el engranaje principal para [...] poder darle formalidad, espíritu de cuerpo, disciplina y lealtad a las policías estatales únicas? [...] ¿Se aprovecharán los elementos que los cuerpos de inteligencia militar y naval comparten con las autoridades civiles para vigilar estados y municipios? [...] ¿Los gobernadores seguirán al pie de la letra las recomendaciones que les dan los generales y los almirantes? ¿Cuál será el papel de la Policía Federal y en específico de la Gendarmería Nacional? [...] ¿No son Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón los hombres clave para comenzar una nueva estrategia?” (Ibarola).

necesario hacer complejas indagaciones para reconocer o identificar un fenómeno que, bien vistas las cosas, se nos aparece todos los días y a flor de piel. Revisemos bajo esta óptica el caso michoacano, pero también el de otras entidades del país en las que, con la realidad o el pretexto del narcotráfico y la extrema violencia padecida, el mando regional ha sido tomado por el ejército.

Puede igualmente verificarse el despliegue de algunos programas gubernamentales, como la Cruzada contra el Hambre, que caminan de la mano con las fuerzas armadas del país para instalar lo que podrían llamarse, más que “comedores populares”, “cocinas de concentración o de integración comunitaria”, para así controlar a la población e incluso cumplir los objetivos de contrainsurgencia. Este no es el espacio para extendernos en dicho punto, sólo agregamos aquí algo que nos parece decisivo en la intencionalidad de este díptico. Como queda claramente documentado en la película *La dictadura perfecta*, a los esquemas de dominio o de control gubernamental de impronta neoliberal les es consustancial la participación protagónica del mando televisivo, en un programa de acción o de intervención que va mucho más allá de la simple “manipulación de la nota”. El experimento más conocido de este nuevo modelo de intervención estatal por medios televisivos se desarrolló en el caso del movimiento de Atenco, justo cuando el actual Presidente del país era gobernador del Estado de México. Hagamos un paréntesis para ubicar el caso.

Recordemos que el conflicto de Atenco surgió desde los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, cuando se anunció que sería construido un nuevo aeropuerto para la ciudad de México en tierras de población ejidal. La respuesta no se hizo esperar: los campesinos y los pobladores de Atenco, enardecidos, iniciaron las movilizaciones. Fue en julio de 2002 cuando llegó el enfrentamiento, con saldo de 30 ejidatarios lesionados, varios de gravedad. La chispa prendió entonces el zacatal. Sin entrar en más detalles, sólo diremos en este punto que la lucha y el tesón de los atenquenses —y de sus multiplicados aliados regionales y nacionales, conquistados sobre la marcha— echaron finalmente atrás el decreto expropiatorio, y con ello la iniciativa presidencial de construir el aeropuerto en el referido terreno ejidal. ¡Un resonante triunfo popular en el espacio-tiempo del despegue de un nuevo ciclo de dominio neoliberal! Y muchos analistas y políticos involucrados en el asunto se llegaron a preguntar: “¿podría esto perdurar como acciones y como memoria?”; los manuales de contrainsurgencia en el

plano de la Guerra Civil puntillosamente señalaban que no podría perdurar. No fue entonces casual que pocos meses antes del fin del sexenio foxista —en el 2006— las fuerzas de la *normalización institucional* encontraran el pretexto para revirar.

Las “fuerzas del orden” fueron lanzadas contra un grupo de vendedores de flores de San Salvador Atenco en la madrugada del 4 de mayo de 2006, por el delito mayúsculo de pretender instalar sus espacios de venta en una calle aledaña a un mercado de Texcoco. El formato de la confrontación pareció diseñado por un maestro en escenificación (dicho esto sin exageración alguna, pues el evento fue transmitido en vivo y en directo por la televisión). En su arremetida contra los vendedores indefensos, los policías utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos, toletes y bastones eléctricos, y ya en el despliegue de la confrontación, entraron a las viviendas “señaladas” sin orden de cateo. La bestialidad del asunto no quedó sólo en el robo y destroz de pertenencias diversas de los habitantes del lugar, sino en las golpizas que se repartieron a granel y que se extendieron a “observadores” y personal de prensa. Los heridos se contaron por decenas, y los detenidos por casi un centenar. En el traslado al penal de Santiaguito, los *cualsea* de Atenco recibieron todo tipo de golpes y vejaciones, y treinta mujeres sufrieron abusos sexuales graves. ¿Por qué y para qué recurren a los excesos de la represión? Por la idea y el objetivo que la contrainsurgencia tiene de crear *impotentes* sociales y políticos dentro del espacio nacional, de forjar una nueva generación de jóvenes mutilados de ciudadanía y de personalidad.

Iván Ilich nos explica las razones profundas de esta particular manera de hacer visible, por medios televisivos, el brutal proceso de represión. Lo cito sin economía de espacio:

Formas más profundas de manipulación son ya de uso común, ya que la cantidad de conocimientos aprendidos a través de los medios de comunicación sobrepasa lo que se aprende por medio del contacto personal, dentro y fuera de la escuela. El aprendizaje por medio de una información programada oculta siempre la realidad detrás de una pantalla [...] Permítanme ilustrar los efectos paralizadores de la información programada utilizando un ejemplo que quizá resulte desagradable. La tolerancia del pueblo norteamericano hacia las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Vietnam es mucho mayor que la

del pueblo alemán ante las atrocidades de Alemania en el frente, en los territorios ocupados y en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Para los alemanes era un delito político discutir los crímenes que cometían los suyos. La presentación de las atrocidades de los estadounidenses a través de las cadenas de televisión fue considerada como un servicio público. Es cierto que la población de Estados Unidos está mucho mejor informada acerca de los crímenes cometidos por su ejército en una guerra colonial, de lo que los alemanes lo estaban sobre los abusos cometidos por la SS dentro del territorio del Tercer Reich. Para obtener información sobre las atrocidades ocurridas en Alemania era preciso correr un gran riesgo; en Estados Unidos, la misma clase de información es vertida por los canales de televisión en nuestra propia sala. Esto no quiere decir, no obstante, que los alemanes estuvieran menos conscientes de que su gobierno estaba comprometido con un cruel crimen en masa de lo que están ahora los norteamericanos. De hecho, puede decirse que los alemanes estaban *más* conscientes debido precisamente a que no estaban psíquicamente abrumados con paquetes de información sobre asesinatos y torturas, a que no estaban anestesiados de modo que aceptaran que todo es válido, a que no estaban vacunados contra la realidad por haberles sido ésta administrada en pedacitos a través de la pantalla de la televisión [...] El consumidor de conocimientos precocinados aprende a reaccionar ante el conocimiento que ha adquirido más que ante la realidad, de la cual un grupo de expertos lo ha abstraído. Su acceso a la realidad es controlado siempre por un terapeuta, y si el alumno acepta tal control como cosa natural, su cosmovisión se convierte en algo higiénico y neutral, y él en una persona políticamente impotente. Se convierte en impotente de conocer en el sentido hebreo de la palabra *jdh*, que significa relación sexual, en la que se penetra la desnudez del ser y de la realidad, porque la realidad de la que puede hacerse responsable se le oculta bajo la tabla de medidas de la información clasificada que ha recibido y asimilado (Ilich, 1978: 28-29)⁷.

⁷ La forma en que Ilich se adelanta a su época en cuanto a la comprensión del fenómeno aquí analizado resulta realmente sorprendente. Más sorprendente resulta para nosotros el hecho de que sus profundos análisis sobre diferentes temas de "la modernidad" sean más conocidos y reconocidos en el extranjero que en México.

Esta es la tarea asumida en la perspectiva del análisis de Ilich: crear *impotentes* sociales y políticos y forjar una nueva generación de jóvenes mutilados de ciudadanía y de personalidad. La economía y la política se convierten aquí en las dos piezas de la pinza, a sabiendas de que la miseria social y reticulada en mapas de control no basta para limitar o reducir las alteraciones del orden en las que se inculca y expande el virus de la rebeldía. El poder político y los medios de comunicación están vinculados en una sola y única misión sagrada en los tiempos post-modernos de la democracia política de un país *ejemplar*⁸.

Martha Lamas, en "Ayotzinapa y el capitalismo 'gore'", lanza la piedra del análisis un poco más allá del punto conclusivo al que había llegado Iván Ilich. La cito también sin economía de texto:

Como bien señala Jorge Alemán, un psicoanalista argentino, actualmente el neoliberalismo disputa el campo de sentido, la representación y la producción biopolítica de subjetividad [...] Al ominoso proceso en el que estamos inmersos generalmente se le interpreta como la consecuencia del vínculo corrupto entre delincuencia organizada y política (gobierno y partido político). Sayak Valencia introduce un elemento fundante de nuestra cultura —el mandato cultural de la masculinidad— y le da un giro al retomar el endriago (personaje mítico en *Amadís de Gaula*), "monstruo que conjuga hombre, hidra y dragón", que "habita tierras infernales y produce gran temor entre sus enemigos". Ella usa el término de *endriago* para "conceptualizar a los hombres que utilizan la violencia como medio de supervivencia, mecanismo de autoafirmación y herramienta de trabajo" [...] De acuerdo con la autora, nuestros endriagos no sólo matan y torturan por dinero, sino que también buscan dignidad y autoafirmación a través de una lógica kamikaze y sacrificial. Estos nuevos sujetos

⁸ Quedó finalmente claro que en el veneno inoculado en el caso Atenco se buscó hacer un daño estratégico en el cuerpo social de la República, puesto que el saldo de tan asimétrico combate es el siguiente: "[...] 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales". Y a tres años del balance [4 de mayo de 2009], con la acumulación de "...irregularidades jurídicas escandalosas que mantienen en la cárcel a doce presos políticos con condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio del Valle, por 112 años de prisión; a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años, y a otras nueve personas [...] que han sido sentenciadas a 31 años 11 meses y 15 días de prisión [...]". Desplegado público, con cientos de firmas internacionales encabezadas por Noam Chomsky y Adolfo Pérez Esquivel, en *La Jornada* del 4 de mayo de 2009.

“ultraviolentos y demoleedores” (sicarios, secuestradores, coyotes y polleros, pero también policías y soldados) “fortalecen las jerarquías de ser y de valor que dividen al mundo entre blancos y sujetos de color en el norte, y entre distintos tipos de mestizos y poblaciones excluidas de proyectos nacionales en el sur” [...] el mandato de la masculinidad que han internalizado los hace incapaces de cuestionar –y rebelarse– ante un sistema donde están estrechamente entretnejidos el poder, la economía y una virilidad depredadora. Un mandato que crea, según explica Valencia, una de las subjetividades más “feroces e irreparables” del capitalismo neoliberal (Lamas, 2014).

Desde estas líneas pueden adivinarse o derivarse algunas de las conclusiones de este escrito: la estrategia de reconversión o de reestructuración capitalista encabezada por Enrique Peña Nieto, desnudada en su máxima radicalidad por la coyuntura abierta a partir de los sucesos de Iguala del 26 y 27 de septiembre, tiene poco que ver con el reconocimiento de derechos humanos y de derechos civiles. Se trata de una estrategia que cabalga en procesos de una “necesaria” reconformación del poder estatal, con “nuevas” fórmulas de operación en las que cabe el esfuerzo

por generar o producir ciudadanías impotentes por medio de un terror suministrado en dosis convenientes desde los medios de comunicación (la televisión, de manera principal), en un esquema de manipulación de la imagen que inscribe en sus intencionalidades implícitas o explícitas reafirmaciones machistas o de masculinización.

Estas son algunas de las líneas perfiladas en el esquema de dominio diseñado por el nuevo capitalismo neoliberal. ¿Tendrá el modelo algunas posibilidades de anclarse en nuestra realidad? Los movimientos sociales y políticos contestatarios y de defensa que ahora se extienden por todo el territorio nacional son tercicos en sus afanes por contradecir. Como en los viejos tiempos... o acaso más.

Bibliografía

- Ilich, Iván (1978). “Después de la escuela, ¿qué?”. Iván Ilich *et al.* *Un mundo sin escuelas*. México: Editorial Nueva Imagen, 1978.
- Lamas, Martha (2014). “Ayotzinapa y el capitalismo ‘gore’”. *Proceso* núm. 1986, 23 de noviembre.
- Ibarrola, Juan (2014). “Y las fuerzas armadas, ¿dónde entran, señor Presidente?”. *Milenio*, 29 de noviembre.

